



GD-F-008 V.9

Página 1 de 7

RESOLUCIÓN No. SSPD - 20174010079335 DEL 17/05/2017

"Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa"

EL ASESOR QUE FUNGE COMO COORDINADOR DEL GRUPO DE CERTIFICACIONES E INFORMACIÓN

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el párrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, en la Resolución No. SSPD 20171300023445 de 2017, la Ley 1437 de 2011 y,

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de conformidad con lo previsto en el párrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual *"se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones"*, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla según sea el caso, a los distritos y municipios del país.

Que el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, estableció que *"La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el párrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007"*.

Que el Superintendente de Servicios Públicos mediante Resolución No. SSPD 20171300023445 del 24 de marzo del 2017, delegó en el Asesor que funge como Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos a través de los cuales se certifique o descertifique a los municipios y distritos, en lo relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, aclarar dichos actos y resolver los recursos que contra ellos se presenten.

Que el Municipio de Barbacoas del Departamento de Nariño, es de categoría 6 y al no haber sido prestador directo de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2015, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015.

Que mediante Resolución No. SSPD 20164010055345 del 30 de septiembre de 2016, la Superintendencia decidió DESCERTIFICAR al Municipio de Barbacoas del Departamento de Nariño por no haber cumplido el siguiente criterio previsto en el artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015:

"Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya".



La notificación del citado acto administrativo se surtió de manera personal por medio electrónico al ente territorial, el 11 de noviembre de 2016, tal y como se observa en el expediente.

Que el Municipio de Barbacoas del Departamento de Nariño, interpuso oportunamente recurso de reposición contra la resolución de descertificación, mediante comunicación radicada No. 20165290816762 enviada por correo electrónico a la Entidad el día 27 de noviembre de 2016.

Que esta Superintendencia con Resolución No. 20174010004945 del 9 de marzo de 2017, resolvió confirmar la resolución recurrida, acto administrativo notificado al ente territorial el 29 de marzo de 2017.

Que el 4 de abril de 2017, el Municipio de Barbacoas del Departamento de Nariño, a través del Radicado No. 20175290228252, solicitó la revocatoria directa de las Resoluciones Nos. SSPD 20164010055345 del 30 de septiembre del año 2016 y SSPD-20174010004945 del 09 de marzo del año 2017, por medio de las cuales se decidió descertificarlo y se resolvió el recurso de reposición que confirmó la decisión, respectivamente.

2. ARGUMENTOS DEL MUNICIPIO Y DOCUMENTOS APORTADOS CON LA SOLICITUD DE REVOCATORIA

2.1. De los argumentos del ente territorial

Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos por la entidad territorial, este Despacho con el ánimo de dar claridad a lo solicitado los agrupará atendiendo las causales dispuestas en el artículo 93 del CPACA, de la siguiente manera:

2.1.1. Sobre el desconocimiento de la Constitución Política y la normatividad aplicable

- Que la SSPD al momento de proferir las Resoluciones Nos SSPS 20164010055345 del 30 de septiembre de 2016 y SSPD 20174010004945 del 9 de marzo de 2017, por medio de las cuales se descertificó al municipio de Barbacoas, consideró que en los porcentajes de aporte solidario para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo establecidos en el Acuerdo Municipal No. 010 de 31 de Mayo de 2014, *"fueron fijados límites de ... (Hasta un 70%, Hasta un 40%, para los estratos 1 y 2, respectivamente), sin definir porcentaje como tal"*, al respecto estima que los actos administrativos no sustentaron la razón por la cual tal estipulación vulnera el ordenamiento jurídico.
- Que los artículos 338 y 368 de la Constitución Política, los artículos 32 de la Ley 136 de 1994 y 2.3.4.2.2 del Decreto 1077 de 2015, no definen un porcentaje determinado de subsidio, que el artículo 99 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 125 de la Ley 1450, señalan que *"el subsidio no podrá ser superior a un porcentaje determinado, SIENDO ESTA LA MISMA FORMA DE REDACCIÓN DEL ACUERDO MUNICIPAL 10 DE 31 DE MAYO DE 2014, el cual señala en su Artículo Primero que el objetivo del mismo es "Definir los factores de subsidio para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para la vigencia 2014 lo siguientes porcentajes... sin que dicho subsidios excedan, en ningún caso, el valor de los consumos básicos o de subsistencia. ESTRATO 1: Hasta el 70%... ESTRATO 2: Hasta el 40%... ESTRATO 3: Hasta el 15%..."*, añadió que lo anterior, evidencia que la forma de redacción del Acuerdo Municipal es perfectamente equiparable a la redacción de las leyes que le ha dado origen, y que el mismo las reproduce casi que de manera textual.
- Que el Acuerdo Municipal No. 010 de 31 de Mayo de 2014, **"PERMITIÓ QUE EL MUNICIPIO FUESE CERTIFICADO PARA LA VIGENCIA 2014, ESTO, POR MEDIO DE RESOLUCIÓN NO. 20154010036955 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015, LA CUAL RESOLVIÓ CERTIFICAR AL MUNICIPIO DE BARBACOAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB, DONDE EN EL FOLIO 2 PUNTO 4 SE EVALÚA EL REQUISITO EN MENCIÓN CON EL MISMO ACUERDO Y LA ENTIDAD CONCLUYE QUE CUMPLE CON EL REQUISITO."** (Está con negrillas y subrayado en el texto original).
- Que las medidas tomadas por la SSPD respecto a la descertificación del municipio, desconocieron *"los postulados constitucionales establecidos en los principios fundamentales superiores, especialmente los de igualdad, descentralización y autonomía de las entidades*

territoriales. Lo que sin lugar a dudas se traduce en que las resoluciones, cuya revocatoria se solicita, fueron proferidas **EN OPOSICIÓN A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ARTÍCULOS 1, 2, 13, 356 Y 357 Y A LA LEY 1176 DE 2007**, razón por la cual debe accederse a las pretensiones de la presente solicitud.

- Que las resoluciones cuestionadas vulneraron el “principio constitucional fundamental de la igualdad”, dado que bajo los mismos presupuestos del ente territorial que representa la SSPD certificó a los municipios del Charco y Mosquera, ambos del departamento de Nariño, en Resoluciones No. “20164010020315 del 7 de septiembre de 2016”¹ y 20164010050645 del 28 de septiembre de 2016, respectivamente, razón por la que estima que esa particularidad “constituye una violación al **DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA IGUALDAD**, todas vez que los señores de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, al evaluar casos bajo los mismos supuestos **FÁCTICOS y JURÍDICOS**, toman decisiones diferentes, afectando gravemente la viabilidad financiera del ente territorial y dando al traste con los principios de la **AUTONOMÍA Y DE LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA**; por lo que este argumento constituye un argumento válido para la procedencia de la revocatoria directa.”. (Está con negrillas en el texto original).

2.1.2. Sobre la afectación al interés público o social del municipio de Barbacoas

- Que el “principio constitucional de autonomía de las entidades descentralizadas es una prioridad para los habitantes del municipio de Barbacoas, prestar los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, ya que el interés general de los habitantes del ente territorial es que los servicios públicos aquí citados se prestan por el mismo ente; por una simple razón, las inconformidades y peticiones que presenten los usuarios, se resuelven de manera más directa en el municipio de Barbacoas (...).

(...) [P]or las razones planteadas en el párrafo anterior, en la constitución de 1991, se estableció el Principio de estado unitario descentralizado con autonomía de las entidades administrativas; esto es, para facilitarle a los coasociados la prestación de los servicios y brindarles una atención oportuna en cada uno de sus entes territoriales, en el caso concreto el artículo 356 ibídem; teniendo en cuenta su proceso histórico y la idiosincrasia de cada comunidad.

Lo antes dicho, nos permite concluir que la decisión establecida en las resoluciones, cuya revocatoria se solicita ‘Por la cual se decide sobre la certificación relacionada con la Administración de los recursos del Sistema General De Participación de Agua Potable y Saneamiento Básico SGP-PSB, **además de vulnerar la Constitución Política en sus artículos 356 y 357 de la Constitución Política, TAMBIEN FUERON PROFERIDOS EN CONTRA DEL INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS**’.

Concluye el Alcalde del municipio de Barbacoas que las resoluciones cuestionadas “**fueron proferidas de manera contraria a la Constitución Política y a la ley, y en contra del interés público; razón por la cual se cumplen los numerales primero y segundo del artículo 93 de la Ley 1437 del año 2011, acerca de la revocatoria directa, por ende, deben ser revocadas; destacando que también esta decisión vulnera el principio constitucional a la igualdad.**”. (Está con negrillas en el texto original).

En consecuencia solicita se “**revoque el contenido de las siguientes Resoluciones SSPD 20164010055345 del 30 de septiembre del año 2016 y la Resolución Número SSPD-20174010004945 del 09 de marzo del año 2017, declarando como cumplidos los requisitos exigidos y se CERTIFIQUE al Municipio de BARBACOAS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, en relación con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico.**”.

2.2 De los documentos aportados con la solicitud de revocatoria

¹ Revisada la resolución esta corresponde al 18 de julio de 2016.

Con el radicado con el No. 20175290228252, por medio del cual se sustentó la solicitud de revocatoria directa, el municipio aportó el siguiente documento:

- Acuerdo Municipal No. 010 de 31 de mayo de 2014 (Concejo Municipal de Barbacoas).
- Resolución No. SSPD – 20164010055345 del 30 de septiembre de 2016
- Resolución No. SSPD – 20174010004945 del 9 de marzo de 2017
- Certificación de 11 de noviembre de 2016 suscrita por el Gerente de la Empresa de Acueducto de Barbacoas.
- Acuerdo Municipal No. 03 de 29 de mayo de 2015 (Concejo Municipal de El Charco, Nariño).
- Acuerdo Municipal Número 005 del 27 de febrero del año 2015, (Concejo Municipal de Mosquera, Nariño).
- Resolución SSPD No. 20164010050645 del 28 de septiembre de 2016, de la SSPD, mediante la cual se CERTIFICÓ en la Administración de los Recursos Financieros para el SGP-APSB, al municipio de Mosquera, departamento de Nariño.

Los anteriores documentos, en su valor legal, se incorporan al expediente.

3. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DEL ENTE TERRITORIAL

Para el referido estudio se deberá abordar previamente el tema relativo a la revocatoria directa en general, para luego hacer referencia a la procedencia de la solicitud bajo los argumentos presentados por el peticionario que estarán agrupados en: i) desconocimiento de la Constitución Política y la normatividad aplicable y ii) afectación al interés público o social del municipio de Barbacoas; para finalmente con base en estos elementos, resolver el caso concreto.

3.1. Respecto a la revocatoria directa en general

La figura jurídica de la revocatoria directa, consiste en la potestad legal atribuida a la administración en cabeza del funcionario que profirió el acto o en su defecto a su superior jerárquico, de oficio o a petición de parte, para que suprima de la vida jurídica una decisión administrativa contraria a la Constitución Nacional o a la ley; al interés público o social, o atenten contra él; o cuando cause un agravio injustificado a una persona, causales previstas en el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), que dispone:

"ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

- 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la Ley.*
- 2. Cuando no están conformes con el interés público o social, o atenten contra él.*
- 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona".*

3.2. Sobre la primera causal del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 - Desconocimiento de la Constitución Política y la normatividad aplicable

Para abordar los argumentos presentados por el Alcalde de Barbacoas, consistentes en que las Resoluciones Nos 20164010055345 del 30 de septiembre de 2016 y No. 20174010004945 del 9 de marzo de 2017, deben ser revocadas por haber sido proferidas en oposición a los artículos 1, 2, 13, 356 y 357 de la Constitución Política, a la Ley 1176 de 2007 y haber desconocido el derecho a la igualdad, por tratarse del primer presupuesto contenido en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, el Despacho procede a examinar la procedencia de lo solicitado y para ello debe hacerse referencia a lo expuesto en el artículo 94 de la Ley 1437 de 2011, el cual señala:

"ARTÍCULO 94. IMPROCEDENCIA. La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del

numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial.” (No está con negrillas en el texto original).

En consecuencia, no podrá formularse revocatoria directa de parte por la primera causal (*Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la Ley*) cuando el peticionario hubiese ejercido los recursos procedentes contra el acto, cuya revocatoria directa pretende.

Para el caso concreto el Despacho precisa que el municipio de Barbacoas el 29 de noviembre de 2016, mediante Radicado No. 20165290816762, presentó recurso de reposición contra la Resolución No. 20164010055345 del 30 de septiembre de 2016, siendo resuelto con Resolución No. 20174010004945 del 9 de marzo de 2017. De esa manera, la solicitud presentada por el Alcalde del municipio de Barbacoas se torna improcedente, respecto a la causal 1ª del artículo 93 del CPACA, dado que como fue demostrado el peticionario interpuso el recurso de reposición que resultaba admisible en el trámite administrativo. En consecuencia, el Despacho se abstendrá de realizar análisis adicionales y rechazará la solicitud, exclusivamente respecto a causa alegada, por las razones expuestas.

3.3. Sobre la segunda causal del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 - Afectación al interés público o social del municipio de Barbacoas

Respecto a la pérdida de autonomía del ente territorial y la afectación al interés público y social, alegado por el representante legal del municipio de Barbacoas, se debe señalarse que tal y como fue expuesto la resolución que resolvió confirmar la decisión de descertificar al municipio de Barbacoas, no se observa la afectación a la autonomía del ente territorial, toda vez que se debe recordar que según la Constitución Política, respecto a su organización política y administrativa, Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales.

Al respecto la Corte Constitucional ha indicado que “[e]sta definición cuida que la unidad de la república no derive en centralismo político sino, al contrario, que regiones, secciones y localidades dotadas de autonomía concurren armónicamente a la consolidación de la unidad nacional desde la diversidad². Al respecto, se dijo en la sentencia C-127 de 2002 que:

“En este sentido quiso así el Constituyente armonizar las partes en un todo dinámico que rebasando la mera descentralización haga viables y trascendentes los derechos que asisten a las entidades territoriales para gestionar con autonomía sus intereses, esto es: para gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les corresponde, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, participar en las rentas nacionales, y por supuesto, ejercer los controles que les atañe conforme a la Constitución y la Ley. Lo cual es indicativo de que a la luz de la Carta la autonomía territorial y la unidad nacional son ampliamente compatibles, se nutren mutuamente, engloban en diferentes estadios institucionales la misma comunidad, concurren dialécticamente a la realización de los fines esenciales del Estado, y por tanto, operan, discurren y se articulan de tal manera que en último término las entidades territoriales sólo pueden realizarse a través de la unidad nacional, al paso que ésta únicamente puede existir a condición de que las entidades territoriales desplieguen su poder autónomo en consonancia con los intereses locales y nacionales. Son, pues, territorialidad y unidad nacional, dos elementos teleológicamente inescindibles, ontológicamente diferenciables a partir de su materialidad geográfica, con unos destinatarios comunes –los habitantes del país–, y por entero, instancias orgánicas y funcionales de un mismo mecanismo estatal: el de la República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista”³ (No está subrayado en el texto original).

En la misma providencia añade la Corte que “la Constitución y la Ley delimitan el alcance de la autonomía de las entidades territoriales, mientras que el artículo 288 superior señala que “[l]as competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley”. Así, la autonomía constitucionalmente reconocida y acotada, también se halla regida por principios que orientan su ejercicio por las autoridades territoriales, en guarda y refuerzo de dos fines constitucionales: (i) el carácter unitario de la Nación, y (ii) el desarrollo equitativo de las

² Sentencia C-478 de 1992

³ Corte Constitucional. Sentencia C-077 del 15 de febrero de 2012. M.P. Mauricio González Cuervo

regiones del territorio colombiano como clave para el logro de la "prosperidad general", esto es, de todos sus habitantes"⁴ (No está subrayado en el texto original).

Así las cosas, en nuestro sistema la autonomía de las entidades territoriales es un principio que está regido por otros principios que orientan el ejercicio de las autoridades territoriales y en este sentido, está sujeto a la constitución y las leyes, entre las cuales se encuentra el proceso de certificación que por disposición legal le corresponde adelantar a esta entidad (Parágrafo del artículo 4º de la Ley 1176 de 2007).

En este orden de ideas, se debe recordar que el proceso de certificación no corresponde a un proceso sancionatorio sino, corresponde a una actuación administrativa atinente a la verificación de una serie de requisitos establecidos en los artículos 2.3.5.1.2.1.6 (municipio no prestador directo) y 2.3.5.1.2.1.7 (municipio prestador directo) del Decreto 1077 de 2015, según lo dispone el artículo 2.3.5.1.2.1.5 *ibidem*, que debe hacer la SSPD con el fin de establecer si entes territoriales pueden ser certificados, lo que les permitirá administrar o no los recursos del SGP – APSB para cada vigencia.

Por consiguiente, es claro que el ente territorial tiene la obligación de cumplir unos requisitos taxativamente establecidos en las normas señaladas dentro de un término establecido. Para el caso concreto, vigencia 2015, el Municipio de Barbacoas, Nariño debió acreditar, por expreso mandato normativo, los requisitos señalados en el artículo 2.3.5.1.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015, a más tardar el 30 de abril de 2015, según lo establecido en el artículo 2.3.5.1.2.1.9 *ibidem*.

Por lo anterior, el municipio como parte de la administración pública y sujeto al principio de legalidad de que habla los artículos 150 y 338 de la Constitución Política, está sujeto al ordenamiento jurídico, sin que ello implique la vulneración del principio de autonomía, máxime cuando en desarrollo de este principio los municipios tienen que reportar la información establecida en el Decreto 1077 de 2015, si desean ser certificados para la administración de los recursos del SGP – APSB y que señala directamente las consecuencias de no acatar dichos requisitos, presupuesto último que se traduce en una descertificación, decisión adoptada mediante las resoluciones en cuestión y que fue proferida conforme a derecho.

Lo anterior conlleva a que sea claro la inexistencia de un agravio injustificado, máxime cuando la Superintendencia evidenció que el municipio no acató la totalidad de requisitos a acreditar a su cargo (tal y como se expuso claramente en las resoluciones atacadas) y aplicó la consecuencia establecida en el Decreto *ibidem*.

Con fundamento a lo señalado, se puede concluir que el proceso adelantado en el marco de la certificación para la administración de los recursos del SGP-APSB, correspondiente para el municipio de Barbacoas se cumplió a cabalidad con los presupuestos exigidos por la norma constitucional y jurisprudencia, lo que incluye su adelantamiento en respeto al debido proceso, por lo que al verificar el incumplimiento del ente territorial, la única posibilidad era descertificarlo, como en efecto ocurrió.

Respecta al argumento según el cual con la decisión de descertificación se afecta el interés público del municipio de Barbacoas, este Despacho considera que las consecuencias de la descertificación son producto de la omisión del ente territorial, circunstancia que por sí mismas no alteran el orden público y social, pues la consecuencia de la decisión adoptada por esta Superintendencia consiste en que los recursos del SGP APSB serán administrados por el departamento de Nariño estando obligado a hacerlo conforme lo dispuesto en la Ley 1176 de 2007. En este orden de ideas el municipio no será privado de los recursos que le corresponden, únicamente no será quien los administre ya que ello corresponderá al respectivo departamento.

De lo anterior, es claro que si el municipio no quiere ser sujeto a una descertificación, tiene que cumplir las normas que le son aplicables, en los tiempos establecidos por estas para tal fin y en un supuesto de descertificación debe asumir las consecuencias de la misma sin afectar la prestación de servicios públicos a sus usuarios. Por lo tanto, no se revocaron las Resoluciones Nos. SSPD 20164010055345 del 30 de septiembre de 2016 y SSPD 20174010004945 del 9 de marzo de 2017, por no estar demostrado que con esas decisiones se hubiese afectado el interés público o social del municipio de Barbacoas.

⁴ *ibidem*.

Conclusión

En este orden de ideas, al encontrarse probado que el municipio había presentado recurso de reposición el 29 de noviembre de 2016, contra la Resolución No. SSPD 20164010055345 del 30 de septiembre de 2016, que fue resuelto el 9 de marzo de 2017 (Resolución No. SSPD 20174010004945), este Despacho rechazará la solicitud respecto a la causal 1ª del artículo 93 del CPACA y no accederá a la solicitud de revocatoria respecto a la causal 2ª, por las razones antes anotadas.

En mérito de lo expuesto, el Asesor que funge como Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECHAZAR por improcedente la solicitud de revocatoria directa planteada por el Municipio de Barbacoas – Nariño contra las Resoluciones Nos. SSPD 20164010055345 del 30 de septiembre de 2016 y SSPD 20174010004945 del 9 de marzo de 2017, respecto a la 1ª causal del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, por haberse configurado el artículo 94 de la misma ley, conforme a la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NO REVOCAR las Resoluciones Nos. SSPD 20164010055345 del 30 de septiembre de 2016 y SSPD 20174010004945 del 9 de marzo de 2017, respecto a la 2ª causal del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, por estar demostrado que no se afectó el interés público o social del municipio de Barbacoas, conforme a la parte motiva de la presente resolución.

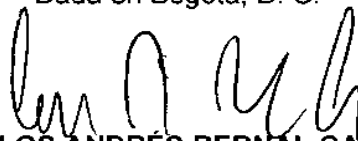
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR personalmente de la presente resolución al alcalde del Municipio de Barbacoas del Departamento de Nariño, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR, una vez en firme, el contenido de la presente resolución al Gobernador del Departamento de Nariño, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y publicar en la página web de la SSPD.

ARTÍCULO QUINTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C.



CARLOS ANDRÉS BERNAL CASAS

Asesor que funge como Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información

Proyectó: Mauricio A. Moncayo Valencia – Contratista DAA

Revisó: Katherine Arenas – Contratista del Grupo de Certificaciones e Información

Aprobó: Carlos Andrés Bernal Casas - Coordinador Grupo de Certificaciones e Información

Expediente: 2016401351600355E